



PROPUESTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE TRANSPARENCIA

Con fecha 13 de marzo de 2022 tuvo entrada en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, formulada por [REDACTED] y registrada con el número de expediente 001-066739 cuyo contenido es el siguiente:

“En relación a los ataques de Rusia a Ucrania, solicito la relación completa de actuaciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos. Donde conste los embargos realizados, las medidas tomadas en otros ámbitos como barcos incautados, mansiones decomisadas, Golden visas revocadas, prohibiciones de amarres de barcos con conexiones rusas, etc. Pido saber si se ha estudiado las medidas tomadas por otros países como Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y EEUU para replicarlas. Pido el valor de la suma total de bienes embargados y los respectivos expedientes completos. Pido expresamente los expedientes abiertos por el Sepblac con los datos totales y desglosados. Muchas gracias. Saludos cordiales.”

El 18 de marzo de 2022 se dio traslado de esta solicitud a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, fecha a partir del cual comienza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, esta Secretaría General resuelve dar acceso parcial a la solicitud de información.

- ***“Relación completa de actuaciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, donde conste los embargos realizados, las medidas tomadas en otros ámbitos como barcos incautados, mansiones decomisadas, Golden visas revocadas, prohibiciones de amarres de barcos con conexiones rusas, etc.”***

Respecto la primera de las cuestiones solicitadas, debe realizarse, con carácter preliminar, una clarificación de los conceptos que operan en este ámbito.



MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO
Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y
POLÍTICA FINANCIERA

S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE
MOVIMIENTOS DE CAPITALES

En concreto, han sido aprobadas una serie de sanciones financieras internacionales, las cuales traen causa de lo previsto en los Reglamentos (UE) nº 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación de Ucrania y (UE) 269/2014, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania que contiene medidas sancionatorias contra entidades que son objeto de medidas de inmovilización de bienes y prohibición de viajar, respectivamente. Así, ambos reglamentos deberán ser actualizados con las múltiples modificaciones que se han ido aprobado en el seno de la Unión Europea al respecto.

Establecido el marco jurídico anterior, lo primero que procede aclarar es la actuación concreta que ampara la normativa de sanciones financieras internacionales. No se procede a un embargo de los recursos económicos, ya que en este caso no existe una traslación de la titularidad del bien, sino una inmovilización de los mismos consistente en *“el hecho de impedir su uso para obtener fondos, mercancías o servicios de cualquier manera, incluida, aunque no con carácter exclusivo, la venta, el alquiler o la hipoteca”*. Como establecen las Buenas Prácticas emitidas por la Unión Europea *“la inmovilización administrativa constituye esencialmente un acto que permite impedir cualquier utilización de los fondos y recursos económicos embargados y cualquier transacción por parte de una persona o entidad designados por una autoridad competente. La inmovilización administrativa ha de distinguirse del embargo, la incautación y el decomiso judiciales, que no pueden imponerse dentro del ámbito de aplicación de las medidas restrictivas, sino solo como medida de aplicación nacional”*.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se han llevado a cabo actividades de difusión de las obligaciones a través del contacto constante con todos los sectores afectados, se ha creado una dirección de correo para la comunicación de congelaciones y la solicitud de consultas, y se ha puesto a disposición del público una serie de comunicaciones y orientaciones para facilitar el cumplimiento efectivo que se puede consultar en:

<https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/sanciones-financieras/rusia>

Por otro lado, desde la Dirección General del Tesoro y Política Financiera se ha procedido al cumplimiento de sus competencias previstas al respecto en la normativa nacional. En particular, lo previsto en los artículos 48.3 y 49.1 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del



blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo relativos a la recepción de las notificaciones de congelación y la autorización de liberación de fondos, cuando proceda. La competencia de la Dirección General es relativa a las notificaciones de congelación de “fondos y recursos económicos”, por lo que los datos solicitados relativos a “Golden visas revocadas” y “prohibiciones de amarres de barcos” exceden de la competencia y conocimiento de este centro directivo.

Por otro lado, el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que:

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La seguridad nacional.
- b) La defensa.
- c) Las relaciones exteriores.
- d) La seguridad pública.
- e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
- g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- h) Los intereses económicos y comerciales.
- i) La política económica y monetaria.
- j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- l) La protección del medio ambiente.

En este caso, la información recabada debe remitirse, tal y como establece el Reglamento (UE) 269/2014, a la Comisión Europea, siempre de manera confidencial. La inclusión en las listas de sancionados y el correspondiente decomiso puede afectar a:

- La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

En primer lugar, porque la inclusión en las listas de sujetos sancionados está justificada por el Consejo de la Unión Europea por la vinculación con determinadas actividades que pueden derivar en responsabilidad penal o administrativa.



MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO
Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y
POLÍTICA FINANCIERA

S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE
MOVIMIENTOS DE CAPITALES

En segundo lugar, porque al ser los reglamentos de obligado cumplimiento, el hecho de no notificar o no congelar por parte de las entidades correspondientes puede dar lugar a una infracción administrativa, tal y como establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, en sus artículos 51.2 y 52.3. La concesión del derecho de acceso podría otorgar información acerca de las entidades que puedan, o no, estar cumpliendo con la normativa vigente, y podría afectar a las investigaciones administrativas realizadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, en ejercicio de las competencias que al respecto tiene atribuidas por el artículo 42.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril a la hora de detectar e inspeccionar el grado de cumplimiento con las obligaciones de congelación, que recaen sobre todas las personas físicas o jurídicas.

Por lo tanto, debe procederse a la denegación de acceso a la información en este punto.

- ***“Pido saber si se ha estudiado las medidas tomadas por otros países como Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y EEUU para replicarlas.”***

El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que:

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La seguridad nacional.
- b) La defensa.
- c) Las relaciones exteriores.
- d) La seguridad pública.
- e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
- g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- h) Los intereses económicos y comerciales.
- i) La política económica y monetaria.
- j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- l) La protección del medio ambiente.

Informar públicamente de las medidas que están siendo llevadas a cabo para la identificación de fondos y recursos económicos pertenecientes a sujetos sancionados, así



como las estrategias y comunicaciones intercambiadas con terceros países supone un perjuicio para los apartados:

- La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

Por lo tanto, debe procederse a la denegación de acceso a la información en este punto.

- ***“Pido el valor de la suma total de bienes embargados y los respectivos expedientes completos”.***

En reiteración de lo ya expuesto, no se ha procedido al embargo de bienes, ya que, aquello a lo que faculta la normativa de sanciones financieras internacionales es la inmovilización de fondos y recursos económicos, no el embargo de estos.

En cuanto al número y valor de fondos y recursos económicos inmovilizados, el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que:

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La seguridad nacional.
- b) La defensa.
- c) Las relaciones exteriores.
- d) La seguridad pública.
- e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
- g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- h) Los intereses económicos y comerciales.
- i) La política económica y monetaria.
- j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- l) La protección del medio ambiente.



Informar públicamente los fondos y recursos económicos pertenecientes a sujetos sancionados que han sido detectados y congelados supondría un grave perjuicio para el ejercicio de las siguientes cuestiones:

- La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

Por lo tanto, debe procederse a la denegación de acceso a la información en este punto.

- ***“Pido expresamente los expedientes abiertos por el Sepblac con los datos totales y desglosados”.***

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) es un órgano de apoyo a la Comisión regulado en el artículo 45.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (en adelante, Ley 10/2010, de 28 de abril).

Es por ello por lo que se aplica a las actuaciones llevadas a cabo por el SEPBLAC lo previsto en el artículo 46.1 segundo párrafo de la Ley 10/2010, de 28 de abril: *“La información y documentación de que disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión y los informes de inteligencia financiera tendrán carácter confidencial, debiendo guardar reserva sobre los mismos toda autoridad o funcionario que acceda a su contenido. En particular, no será en ningún caso objeto de revelación la identidad de los analistas que hayan intervenido en la elaboración de los informes de inteligencia financiera ni la de los empleados, directivos o agentes que hubieran comunicado la existencia de indicios a los órganos de control interno del sujeto obligado”.*

Asimismo, es igualmente de aplicación lo previsto en el artículo 49 de la Ley 10/2010, de 8 de abril, en el cual se establece, en su punto primero, que:

“Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o para cualquiera de sus órganos y hayan tenido conocimiento de sus actuaciones o de datos de carácter reservado están obligadas a mantener el debido secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades previstas por las leyes. Estas personas no podrán publicar,



MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO
Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y
POLÍTICA FINANCIERA

S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE
MOVIMIENTOS DE CAPITALES

comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de cualquiera de sus órganos en virtud de cuantas funciones les encomiendan las leyes tendrán carácter reservado y no podrán ser divulgados salvo en los siguientes supuestos...”

Por lo tanto, debe procederse a la denegación de acceso a la información en este punto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 11 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.